



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)**

*Proyecto discutido y aprobado en sala virtual*

Demandante: ADRIANA MARÍA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ  
Demandados: ACP COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.  
Radicado: 05001 31 05 017 2021 00213 01  
Sentencia: S-163

### **AUTO**

En atención a la escritura pública 3365 del 2 de septiembre de 2019 allegada al expediente, en la que se otorga poder general para representar a la ACP COLPENSIONES a la sociedad MUÑOZ MEDINA ABOGADOS S.A.S., se le reconoce personería como apoderada judicial al Dr. SANTIAGO MUÑOZ MEDINA, T.P. 150.960 del C. S. de la Judicatura.

Se accede además a la sustitución de poder presentada por el referido apoderado, a favor de la Dra. LINA MABEL HERNÁNDEZ OSORIO, portadora de la T.P. N° 300.515 del C. S. de la Judicatura, a quien se le reconoce personería judicial para actuar en los mismos términos que al apoderado principal, con efectos desde el momento mismo de la presentación del memorial.

### **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a

resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y por la codemandada COLPENSIONES, al igual que el grado jurisdiccional de Consulta concedido a favor de ésta última en los aspectos no recurridos, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín el 29 de septiembre de 2021.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES:**

ADRIANA MARÍA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ demandó a PROTECCIÓN S.A. y a la ACP COLPENSIONES, pretendiendo se declare la nulidad de la afiliación efectuada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, por cuanto no se le proporcionó una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos debidamente indexados. Pretende además se condene a las costas y agencias en derecho que el proceso cause.

### **LOS HECHOS:**

Expone como fundamento de sus peticiones, que se afilió al Régimen de Prima Media -RPMPD- administrado por el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, en marzo de 1992, cotizando en dicho régimen hasta enero de 1997; el 27 de enero de 1997 un asesor de PROTECCIÓN S.A. le hizo suscribir un formulario de afiliación a esa entidad sin explicarle los pro y los contra de tomar tal decisión, nunca le advirtió las características de los regímenes pensionales con el fin de que tuviera la oportunidad de escogencia. Agrega que el fondo privado no le hizo una asesoría personalizada, ni se le hizo ningún cálculo, ni proyección alguna de su pensión. Manifiesta que

PROTECCIÓN S.A. le informó que no contaba con un archivo físico de asesoría al momento de la afiliación; con la respuesta PROTECCIÓN S.A. le hace llegar un documento denominado asesoría pensional realizada el 27 de septiembre de 2011, sin embargo, allí no se le explicaron los pro y los contra de los regímenes pensionales. Por último, indica que el 29 de julio de 2019 solicitó traslado a Colpensiones, mismo que le fue negado con el argumento de que le faltaban menos de 10 años para cumplir la edad para pensionarse.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:**

Al contestar, COLPENSIONES admite que la demandante se afilió a esa entidad en el mes de marzo de 1992, no obstante, manifiesta que cotizó 6.14 semanas hasta abril de mismo año; que le negó el traslado al RPMPD por cuanto le faltaban menos de 10 años para el cumplimiento de la edad para pensionarse. Sobre los demás hechos expresa que por ser circunstancias en las que esa entidad no tuvo ninguna injerencia, no le constan. Se opuso a las pretensiones en tanto dice que aceptar dicho traslado pondría en riesgo la estabilidad financiera del sistema, además de que el traslado se produjo en ejercicio del derecho a la libre elección de régimen. Bajo el título de peticiones especiales solicita la devolución indexadas de los aportes efectuados por la parte actora en el RAIS. Como excepciones propuso improcedencia de la declaración de la ineficacia del traslado de régimen realizado por la demandante, falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción, buena fe de Colpensiones, e imposibilidad de condena en costas.

A su turno, PROTECCIÓN S.A. aceptó que la demandante presentó solicitud a esa entidad y se le informó que no contaba con un archivo físico de asesoría al momento de la afiliación, que el monto de la mesada pensional en esa AFP sería de devolución de saldos por vejez. Sobre la afiliación de la accionante al RPMPD y la solicitud presentada ante Colpensiones de traslado de régimen, dijo que no le constan toda

vez que se trata de un trámite ante otra administradora. Niega los demás hechos relacionados con la falta de asesoría a la demandante al momento de suscribir el formulario de afiliación, insistiendo en que brindó una asesoría integral y completa respecto a todas las implicaciones de su decisión, indicando cada una de las características del RAIS y su diferenciación con el RPMPD. Debe observarse que la demandante fue reasesorada el 27 de septiembre de 2011, cuando se le explicó cuál sería la forma de liquidar la pensión en el RAIS y en el RPM y el monto que arrojaría su mesada en ambos regímenes; así mismo se le indicó que tenía plazo hasta el 5 de octubre de 2011 para tomar su decisión de regresar a Colpensiones o continuar afiliada al RAIS, ya que una vez le faltaren menos de 10 años para pensionarse no podría trasladarse nuevamente de régimen, y ella misma manifestó en ese momento que se quedaba en el RAIS, convalidando su consentimiento de continuar afiliada en PROTECCIÓN S.A..

Como excepciones de fondo propuso inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP: inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración, inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2021, el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín DECLARÓ la ineficacia de la afiliación efectuada por la demandante al Régimen de Ahorro Individual, ORDENANDO su regreso y reactivación a COLPENSIONES. ORDENÓ además a PROTECCIÓN S.A. trasladar a COLPENSIONES los recursos de la cuenta de ahorro individual, junto con los rendimientos que se hubieren causado y el porcentaje destinado al fondo de

garantía de pensión mínima. Finalmente, CONDENÓ en costas a la AFP PROTECCIÓN S.A., fijando como agencias en derecho la suma de \$2.000.000.

### **DEL RECURSO DE APELACIÓN:**

Inconforme con lo decidido, el apoderado de la parte **demandante** recurre la sentencia solicitando sea adicionada en el sentido de ordenar a PROTECCIÓN S.A. la devolución de los gastos de administración, con base en el principio de la equivalencia consagrado en el artículo 20 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 7 de la ley 797 de 2003, puesto que, como consecuencia lógica de la declaratoria de ineficacia, esos dineros nunca debieron haber entrado al fondo de pensiones privado. Solicita que en caso de que las codemandadas Protección S.A. y Colpensiones presenten recurso de apelación, sean condenadas en costas.

COLPENSIONES recurre argumentando que los efectos jurídicos que le siguen a la declaratoria de ineficacia lo son la devolución de los gastos de administración, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia en sentencia como SL3464-2019, y de tiempo atrás inclusive con la sentencia N° 31939 del 9 septiembre de 2008 y SL4964-2018, en las que se argumenta que si los Fondos Administradores de Pensiones ya no tienen los recursos de los gastos de administración porque los han invertido o los han utilizado en su propio funcionamiento, igualmente deberán devolverlo a la AFP del régimen de prima media con cargo a sus propios recursos.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:**

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, COLPENSIONES presentó alegatos de conclusión indicando que el documento suscrito por la accionante solicitando el traslado obedeció a la decisión de una persona plenamente capaz, en ejercicio de la

autonomía de la voluntad y del derecho a la libre selección que consagra el art 2 de la Ley 100/93. Debe tenerse en cuenta que las normas laborales establecen unos requisitos para el traslado de régimen y prohíbe expresamente el mismo cuando a la persona le falten 10 años o menos para cumplir la edad de pensión, conforme al artículo 2 de la Ley 797 de 2003. Sostiene que la declaratoria de nulidad o ineficacia del traslado, con la orden de tener a la demandante como afiliada a esa AFP, atenta contra la sostenibilidad financiera del sistema, puesto que, al estarse muy cercano a la fecha del cumplimiento de la edad, los recursos limitados del RPM deberán entrar a cubrir los valores o montos económicos, que adicionalmente sean necesarios para la protección del derecho pensional. Finalmente, señala que según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, cuando se declara la ineficacia del traslado al RAIS, hay lugar a reintegrar la totalidad de la cotización, es decir: i) los recursos de la cuenta de ahorro individual; ii) las cuotas abonadas al Fondo de Garantía de Pensión Mínima; iii) los rendimientos; iv) la anulación de Bonos Pensionales; y v) los porcentajes destinado al pago de Seguros Previsionales y gastos de administración; todo de manera indexada.

El apoderado de la DEMANDANTE presentó sus alegatos bajo los mismo argumentos esbozados en el recurso de apelación, solicitando sea confirmada la decisión de primera instancia y se ordene devolver a la AFP privada con dirección a Colpensiones, los dineros que por concepto de los descuentos del artículo el artículo 20 Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 7 de la ley 797 de 2003 fueron extraídos de cada una de las cotizaciones realizadas por la actora, dineros que tenían como fin el pago del Fondo de garantía de pensión mínima, gastos de administración, prima de reaseguros de Fogafín y primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes. Todo lo anterior debidamente indexado.

### **CONSIDERACIONES:**

Corresponderá en esta instancia, además de resolver los temas propuestos por los recurrentes, conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de COLPENSIONES - en los temas restantes - con el objeto de salvaguardar sus intereses, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia de primera instancia mediante la cual se declaró la ineficacia de la afiliación de la señora ADRIANA MARÍA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ realizada al RAIS, así como las ordenes consecuenciales respecto a los dineros que la AFP PROTECCIÓN S.A. queda en la obligación de trasladar.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se tiene que: *i)* ADRIANA MARÍA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ nació el 09 de octubre de 1964; *ii)* se afilió al ISS el 10 de marzo de 1992 haciendo cotizaciones hasta el 21 de abril de ese mismo año; y *iii)* el 27 de enero de 1997 suscribió el respectivo formulario de afiliación a la AFP PROTECCIÓN S.A. entidad en la que se encuentra afiliada actualmente.

Lo que pretende la demandante con la presente acción judicial, es que se declare ineficaz su traslado al RAIS, administrado en este caso por la AFP PROTECCIÓN S.A., y que, en consecuencia, se declare que su afiliación válida es la que corresponde a COLPENSIONES con apoyo en que recibió un asesoramiento insuficiente por parte de los promotores del fondo privado, dado que, al momento de tramitar el traslado, no se tuvo en cuenta su situación particular, lo que ocasionó que abandonara un régimen que claramente le era más favorable.

Al respecto importa reiterar, tal y como se ha dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008,

en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación.

Así lo señaló desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando con el transcurso de los años, y en el año 2019 la tesis fue afianzada, como puede verse, entre otras, en las sentencias SL 1421, SL 1452, SL 1688 y SL 1689, todas, se repite del 2019. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

*“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”*

En la SL 1452-2019, Rad. 68852 del 3 de abril de 2019, la Corte Suprema de Justicia robusteció el criterio que apunta a considerar, como ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado, los siguientes: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) que le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y



completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) que no es necesario estar a portas de causar el derecho o tener un derecho consolidado para que se produzca la ineficacia del traslado.

En la misma providencia, se analizaron los diferentes estadios de la evolución normativa respecto de esta exigencia, cada uno de ellos con regulaciones propias que apuntan a la misma finalidad en cuanto a la garantía para el afiliado de su derecho a una debida información, bien al momento de elegir el régimen pensional, ora cuando opte por trasladarse de régimen. Exigencias que se tornan cada vez más rigurosas, así:

1. Partiendo de una primera fase, compuesta por aquellas disposiciones que se derivaron de la Ley 100 de 1993, en sus artículos 13 literal b), 271 y 272, así como el decreto 663 de 1993 o Decreto Orgánico del Sistema Financiero, el cual incluye los fondos de pensiones, momento para el cual, el alcance mínimo del deber de información incluía la ilustración de *“las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales”*
2. Vino luego una segunda etapa a partir de la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010, caracterizado porque obligó al análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y de los pormenores de los regímenes pensionales, Y
3. Un tercer periodo que viene dado desde la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015, tildada como la ley de doble asesoría, el cual lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

En el presente caso, no existen pruebas que permitan tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas del afiliado, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información al afiliado, al no suministrarle, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación, no puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento. También a este respecto se ha pronunciado la jurisprudencia ordinaria, v. gr. sentencia SL 19447-2017:

*“Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, **no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que***

***soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario [...].***

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Ahora bien; en torno al argumento de COLPENSIONES relativo a una eventual afectación de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, se ha considerado que el retorno del afiliado (a) al régimen que administra COLPENSIONES, va acompañado del traslado de los dineros que se hubieren alcanzado a acumular en la cuenta de ahorro individual, junto con los rendimientos financieros y todos aquellos conceptos recibidos por la administración de los recursos, seguros y garantía de pensión mínima, con lo cual se entiende que se garantizaría la financiación de la pensión a la que se pueda llegar a acceder. En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

### **Cuotas de administración.**

De otro lado, en cuanto a la decisión de la *a quo* de ordenar el traslado del saldo existente en la cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos financieros y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, pero sin incluir lo relacionado con las cuotas y/o gastos de administración, tema que se revisará según el recurso de apelación planteado por la parte demandante y por COLPENSIONES, y lo relacionado con los seguros previsionales, tema que se revisa en virtud del grado jurisdiccional de consulta concedido a favor de COLPENSIONES, basta con indicar que la Sala ha

considerado en múltiples pronunciamientos que es factible ordenar a las AFPs correspondientes, que procedan con el traslado a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en las sentencias SL 31989 - 2008; SL 4964 de 2018, SL 4989 de 2018, SL 1421 de 2019, SL 1688 de 2019, rad. 68838 de mayo 8 de 2019, o más recientemente la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667. En esta última dijo expresamente lo siguiente:

*"Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

*(...)*

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.*

(...)

*Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima» (Resaltado por la Sala).*

Si bien es cierto por regla general los actos jurídicos son celebrados para que sean eficaces y produzcan efectos jurídicos propios, cuando tales actos jurídicos no resultan eficaces, por haber nacido viciados en el sentido amplio del término, desde el comienzo o incluso porque llegan a desaparecer por un evento posterior a la celebración del acto, se traduce en que nunca produjeron efectos o que habiéndolos producido dejan de generarlos por una causal sobreviniente a la celebración del acto jurídico. En el primer evento, esto es, cuando se considera que el acto nunca produjo efectos, como en este caso acontece, las cosas vuelven a su estado anterior, como si aquel jamás hubiera nacido a la vida jurídica.

En consecuencia, la decisión deberá ser MODIFICADA en el sentido de ordenarle a la AFP PROTECCIÓN S.A. que proceda con el traslado de todos los conceptos recibidos durante el tiempo que la señora ADRIANA MARÍA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ estuvo vinculada a esa entidad, incluyendo, como debe ser, las cuotas y/o gastos de administración, sumas adicionales de las aseguradoras y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima.

### **Indexación.**

Se advierte que la orden a PROTECCIÓN S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas y/o gastos de administración, los seguros previsionales y los aportes destinados al

fondo de garantía de pensión mínima, deben incluir la respectiva indexación, según la ha indicado la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, recientemente en la sentencia SL 3349 del 28 de julio de 2021 rad. 88826; y según fuera solicitado por COLPENSIONES desde la contestación de la demanda, recabado en los alegatos de conclusión presentados en esta instancia; así como por la parte demandante desde la presentación de la acción y en la reiteración en alegatos.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **R E S U E L V E:**

**CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, el día 29 de septiembre de 2021, pero la **MODIFICA** en el sentido de ordenarle a la AFP PROTECCIÓN S.A. que proceda igualmente a trasladar a la ACP COLPENSIONES-, el valor recibido por concepto de cuotas y/o gastos de administración durante el tiempo que la demandante estuvo afiliada a esa entidad, incluyendo los porcentajes de seguros y reaseguros y los aportes al fondo de garantía de pensión mínima.

Se advierte que la orden a PROTECCIÓN S.A. de trasladar las cuotas y/o gastos de administración, los porcentajes de seguros y reaseguros y aportes al fondo de garantía de pensión mínima, deberá incluir la respectiva indexación.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

**Firmado Por:**

**John Jairo Acosta Perez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**Jaime Alberto Aristizabal Gomez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**Francisco Arango Torres**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f55033c8ce51a7dcb9b66955112514704177360ae0bbde8a529b1440378c91f3**

Documento generado en 17/06/2022 01:26:55 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**